Tanto en la Declaración de las Naciones Unidas de 1993 como en la Convención de Belém do Pará se utiliza, en la versión inglesa, la expresión “gender based violence” (violencia basada en género) para reconocer que los factores de riesgo, las consecuencias y las respuestas de las comunidades a la violencia contra las mujeres están influidas en gran medida por la subordinación social, económica y jurídica de las mujeres en muchos entornos. Por ejemplo, la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia puede aumentar con la desigualdad de género en las relaciones y con la dependencia económica respecto de los esposos/compañeros.

Ciertas formas de violencia contra las mujeres, como la violencia física por parte de un esposo/compañero, a menudo son toleradas o hasta aprobadas por leyes, instituciones y normas de la comunidad; y algunos investigadores argumentan que la violencia contra las mujeres puede ser no solo una manifestación de la desigualdad de género, sino también una manera de imponerla.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS declararon en 1994 que la violencia contra la mujer constituye un problema de salud pública y de derechos humanos, que afecta a un gran número de mujeres durante todo el ciclo de vida, que se da en todo el mundo, y que representa una forma extrema de desigualdad de género. Señalan que este tipo de violencia adopta muchas formas, pero que la violencia sexual, física y emocional por un compañero varón son las formas más prevalentes. La violencia contra la mujer es, por tanto, una expresión de la asimetría de la distribución del poder que se encuentra en las relaciones de género.

De hecho, la evidencia científica indica que las modalidades, los factores de riesgo y las consecuencias de la violencia contra las mujeres son diferentes de los asociados a la violencia contra los hombres.

En todo el mundo, los hombres tienen mayores probabilidades que las mujeres de sufrir violencia en el contexto de conflictos armados y actividades delictivas, mientras que las mujeres tienen mayores probabilidades que los hombres de sufrir violencia y lesiones provocadas por personas cercanas, como esposos y compañeros. Las niñas y las mujeres también tienen mayores probabilidades que los niños varones o los hombres de sufrir violencia sexual en general. Además, la violencia física y sexual contra las mujeres y niñas tiene numerosas consecuencias para la salud reproductiva que son diferentes de las consecuencias de la violencia contra los hombres.

Ambas organizaciones señalan que la violencia contra la mujer tiene consecuencias perdurables que afectan profundamente su salud física y mental, la salud y el desarrollo psicosocial de sus hijos e hijas, el bienestar de las familias y comunidades, y que afecta el presupuesto y el desarrollo económico de las naciones.

Es por esto que, en diversas resoluciones de la OPS y la OMS, se reconoce que la violencia es un problema mundial de salud pública y se señala a las mujeres como un grupo que corre un riesgo mayor de sufrir tipos específicos de violencia.

Los datos probatorios indican que la violencia contra las mujeres:

- Es una causa principal de lesiones y discapacidad de mujeres de muchas partes del mundo, así como un factor de riesgo de otros problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva.
- Tiene consecuencias de largo plazo e intergeneracionales para la salud, el desarrollo y el bienestar de los hijos de las mujeres maltratadas.
- Tiene consecuencias sociales y económicas negativas para toda la sociedad.

La violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos fundamentales: del derecho a la vida, a la libertad y seguridad, a la integridad física, psíquica y moral, así como un obstáculo fundamental al logro de la equidad de género.